



La consulta plantea si sería conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, y su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, recabar del Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico los datos de los conductores que hubieran podido adquirir un vehículo de su marca a fin de remitirles una comunicación en la que les informarán acerca del futuro uso de sus datos con fines de remisión de comunicaciones comerciales de sus productos por vía postal, enviando dichas comunicaciones exclusivamente a quienes no hubieran manifestado su deseo de no recibirlas.

Para dar adecuada respuesta a la cuestión planteada debe en primer lugar analizarse el acceso por parte de la persona que obtuvo el certificado divulgado al Registro de Vehículos.

El artículo 11.1 de la Ley Orgánica 15/1999 dispone que “los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado”. No obstante, no será necesario el consentimiento del afectado “cuando la cesión está autorizada en una Ley” (artículo 11.2 a).

El artículo 5 h) del Texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, establece que “se atribuyen al Ministerio del Interior las siguientes competencias en el ámbito de esta Ley, sin perjuicio de las que tengan asumidas las Comunidades Autónomas en sus propios Estatutos ... h) Los registros de vehículos, de conductores e infractores, de profesionales de la enseñanza de la conducción, de centros de formación de conductores, de los centros de reconocimiento para conductores de vehículos a motor y de manipulación de placas de matrícula, en la forma que reglamentariamente se determine”.

En consecuencia, el citado precepto reconoce la subsistencia del Registro de Vehículos, creado por el artículo 244 del Código de la Circulación, aprobado por Decreto de 25 de septiembre de 1934, habilitando expresamente al desarrollo reglamentario del Texto Refundido para establecer el régimen del citado Registro.

Dicho desarrollo se produjo a través de la aprobación del Reglamento General de Vehículos, en virtud de Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, cuyo artículo segundo establece en su párrafo primero que “la Jefatura Central de Tráfico llevará un Registro de todos los vehículos matriculados, que adoptará para su funcionamiento medios informáticos y en el

que figurarán, al menos, los datos que deben ser consignados obligatoriamente en el permiso o licencia de circulación, así como cuantas vicisitudes sufran posteriormente aquéllos o su titularidad”.

En cuanto a su finalidad, el párrafo segundo del precepto previene que “estará encaminado preferentemente a la identificación del titular del vehículo, al conocimiento de las características técnicas del mismo y de su aptitud para circular, a la comprobación de las inspecciones realizadas, de tener concertado el seguro obligatorio de automóviles y del cumplimiento de otras obligaciones legales, a la constatación del Parque de Vehículos y su distribución, y a otros fines estadísticos”.

Por último, y en lo atinente a la publicidad de sus datos, el párrafo tercero del citado artículo 2 añade que “el Registro de Vehículos (...) será público para los interesados y terceros que tengan interés legítimo y directo, mediante simples notas informativas o certificaciones”. En consecuencia, se establece el carácter público del Registro, bastando para la consulta de sus datos la alegación de la existencia de un interés legítimo y directo en la consulta.

De este modo, sería precisa la invocación por parte de la consultante de un interés legítimo y director relacionado con el conocimiento del titular de un determinado vehículo, debiendo dicho interés encontrarse además vinculado a las finalidades propias del Registro de Vehículos que establece el propio Real Decreto 2282/1998.

Por tanto, sólo cuando que se aprecie la existencia de “interés legítimo y directo” vinculado a la finalidad propia del Registro de Vehículos en la consulta de los datos del citado registro, la comunicación de los datos contenidos en el mismo, aun no contando con el consentimiento del afectado, resultará conforme a lo dispuesto en el artículo 11.2 a) de la Ley Orgánica (dada la remisión reglamentaria efectuada por el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y el carácter público atribuido al Registro de Vehículos), correspondiendo a la Dirección General de Tráfico la apreciación de ese interés y, en su caso, al Ministerio del Interior la posibilidad de promover las correspondientes reformas que permitan limitar total o parcialmente el acceso a los datos del Registro. En tanto no exista un cambio en la normativa vigente, el acceso sería posible en los términos descritos.

Como ya se ha indicado, la causa legitimadora del acceso al Registro debe encontrarse vinculada con la finalidad que es propia del mismo, lo que necesariamente afectará a la utilización de los datos con posterioridad a su obtención. En este sentido, el artículo 11.5 de la Ley Orgánica 15/1999 establece que “Aquél a quien se comuniquen los datos de carácter personal se obliga, por el solo hecho de la comunicación, a la observancia de las disposiciones de la presente Ley”.



El artículo 4.1 de la Ley Orgánica consagra el principio de proporcionalidad en el tratamiento de los datos al disponer que “Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido”.

Este principio se completa con lo dispuesto en el artículo 4.2, que dispone que “Los datos de carácter personal objeto de tratamiento no podrán usarse para finalidades incompatibles con aquellas para las que los datos hubieran sido recogidos”.

Pues bien, habiendo sido obtenidos los datos del Registro en función de la concurrencia en el solicitante de un interés legítimo y directo para su conocimiento, en los términos establecidos en el Reglamento de Vehículos, el artículo 4.1 de la Ley Orgánica 15/1999 impone que los datos sean empleados precisamente para esa finalidad legítima vinculada con el interés que justificó su comunicación al solicitante.

Por su parte, el artículo 4.2 impediría la utilización de los datos para un fin incompatible con el derivado del interés apreciado para acceder al Registro, debiendo recordarse que la Sentencia del Tribunal Constitucional 292/2000, de 30 de noviembre, ha venido a sentar la doctrina de que el término “incompatible” debe ser interpretado restrictivamente, debiendo considerarse, con carácter general, asimilado a “distinto”.

Teniendo en cuenta estas previsiones, el acceso a la información del Registro sobre la mera base o causa justificativa del interés del solicitante de conocer quiénes resultan ser propietarios de un vehículo de una determinada marca no parece casar dentro de la referencia al interés legítimo y directo que fundamentaría el acceso, que debe a su vez entrarse necesariamente vinculada a las finalidades propias del Registro. En este sentido, la necesidad de invocar ese interés parece exigir una singularización de cada uno de los accesos, no pudiendo entenderse autorizados por la norma accesos más o menos indiscriminados basados única y exclusivamente en la marca del vehículo, como sucedería en este caso.

Además, el uso posterior de los datos debería aparecer igualmente vinculado a las finalidades propias del Registro y en el supuesto presente los datos se recaban con la única finalidad de tratarlos para recabar el consentimiento de los afectados a través del procedimiento establecido en el artículo 14 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica, lo que no parece compatible con dicha finalidad.

Tampoco cabría considerar subsanada la falta de legitimación para el tratamiento por el hecho de que los datos sólo sean empleados para la



remisión de una comunicación informando acerca del futuro envío de comunicaciones comerciales, de forma que en caso de no desearse recibir las mismas se cesará en el tratamiento de los datos, toda vez que la legitimación debería ya concurrir en el momento en que se produce la comunicación y, como se ha indicado, esta Agencia no puede considerar legitimado el tratamiento de los datos para la remisión de esta primera comunicación.

En consecuencia, se considera que el supuesto planteado no tiene encaje en la normativa de protección de datos de carácter personal.